

ra la tarea de síntesis y con alguna adición para la puesta al día, conserva sustancialmente el texto de la edición en 1965. Se mantiene, igualmente, la distribución en capítulos, secciones y epígrafes, que en su mayor parte conservan la misma titulación. Cabe destacar entre las novedades de la presente edición la inclusión del capítulo XV, dedicado al culto acatólico, y que opinamos de gran relevancia para una obra de Derecho estatal sobre cuestiones eclesiásticas.

La edición de 1975, prescinde de lo que en 1965 fue calificado de útil novedad, como son la serie de índices, debidos al Dr. Avino Vincenzo (de nombres y de autores, de fuentes, de jurisprudencia y el analítico-alfabético de materias); no obstante, creemos que dada la importante reducción de páginas lograda en la obra que se comenta, la utilidad de aquellos índices, en orden a facilitar el manejo de la misma, quedan plenamente suplidos por el índice sistemático que acompaña a la misma.

El Prof. Mario Petroncelli, logra ampliamente la pretensión apuntada en la «advertenza», de ofrecer de forma reducida, clara y sintética, una obra que bien podría ser titulada: Elementos de derecho eclesiástico.

FELIO VILARRUBIAS

DERECHO SUBSIDIARIO EN EL DERECHO PORTUGUES

GUILHERME BRAGA DA CRUZ, *O direito subsidiário na história do direito português*, separata de la «Revista Portuguesa de História», XIV, «Homenagem ao Prof. Paulo Merêa», 140 págs., Coimbra, 1975.

La importancia del derecho supletorio, que sirve para colmar las lagunas existentes en un ordenamiento jurídico, es fundamental en la historia de los derechos comparados. Considerado el fenómeno bajo una perspectiva histórica, se puede constatar que durante aquellos periodos en que la insuficiencia de las fuentes inmediatas obligaba a cada paso al empleo de las fuentes subsidiarias, la importancia que tuvo el derecho supletorio fue todavía mayor y jugó un papel extraordinario como elemento de aproximación cultural entre los pueblos, haciendo que sus respectivos ordenamientos jurídicos alcanzaran un grado de unidad mucho más estrecha de lo que cabría suponer, a la vista de las diferencias existentes entre sus propias normativas, tanto escritas como consuetudinarias.

Este problema, tan medular en la vida jurídica de cualquier pueblo, ha sido estudiado en Portugal por uno de sus grandes e indiscutibles maestros: el Prof. Braga da Cruz, eminente figura de la Facultad de

Derecho de Coimbra. Esta Universidad, de tan merecido renombre en la historia de la cultura occidental, tiene el honor de poder contarle, no tan sólo entre sus Rectores magníficos, sino también entre los varones más ilustres que han formado parte de su Claustro académico.

El trabajo que reseñamos aquí es uno de aquellos que podrán presentarse a los jóvenes estudiosos como ejemplo modélico de lo que debe ser una investigación histórico-jurídica. El autor, ante todo, ha tenido el acierto de escoger un tema de primerísima importancia. Luego, ese tema lo ha desarrollado limpiamente, con una increíble sencillez argumental. Así, resulta fácil y atractiva la lectura de un texto lúcido y coherente, pero que está avalado por un impresionante aparato documental, que justifica cada una de las ideas y de las afirmaciones.

Punto de partida de esta monografía es la situación jurídica subsiguiente a la constitución de un derecho nacional portugués, tras la independencia del Reino con respecto a la vieja Monarquía leonesa. La autonomía del ordenamiento lusitano se consumó en el siglo XIII, ya bajo el signo de la Recepción romano-canónica, y este derecho «común» a toda la Cristiandad occidental constituyó el inagotable manantial de normas jurídicas, que servían para resolver un sinnúmero de problemas no previstos en las limitadas fuentes del derecho nacional.

En una primera época, el derecho supletorio romano-canónico llegó a Portugal a través de las obras castellanas del **corpus** alfonsino, los tratados de Maese Jacobo de las Leyes, el Fuero Real y sobre todo las Partidas, todas las cuales fueron objeto de traducciones portuguesas. El progreso ulterior en la formación de juristas y jueces les permitió en el siglo XIV emanciparse de la mediación castellana y recurrir directamente a las fuentes originales del derecho romano y canónico, al manejo inmediato del **Corpus Iuris** y de la «Glosa», del «Decreto» y de las «Decretales». En el siglo XV, Alfonso V aprovechó la elaboración de la primera gran codificación nacional portuguesa, los «Ordenamientos Alfonsinos», para establecer un completo sistema de prelación de normas: la prioridad absoluta se otorgó a las leyes del Reino; a falta de ellas, como normas supletorias para cubrir lagunas, los «Ordenamientos» señalan los criterios de las «leyes imperiales» y los «santos cánones», es decir del derecho romano y del canónico. El parecer de los doctores, comenzando por la glosa de Acursio seguida de las opiniones de Bártolo, cierran el elenco de autoridades, a falta de las cuales los casos habían de ser propuestos a la apreciación personal del monarca, cuya decisión tenía valor de precedente legal para los supuestos análogos.

Esta reglamentación del sistema del derecho supletorio se mantuvo en líneas generales en los «Ordenamientos manuelinos», de principios del siglo XVI y en los «Ordenamientos filipinos» del año 1603. Haría falta llegar al siglo XVIII para que el planteamiento fuera

revisado profundamente por la llamada «Lei da Boa Razão» de 18 de agosto de 1769, obra del Marqués de Pombal, el omnipotente ministro de José I, que fue seguida de una «Reforma da Universidade», encaminada a formar las nuevas generaciones de juristas de acuerdo con las directrices ideológicas inspiradoras de la nueva legislación.

La «Lei da Boa Razão» pretende que su regulación del derecho supletorio aparezca como una mera aclaración de la forma correcta en que habían de interpretarse las reglas contenidas en los «Ordenamientos». Establecían éstos, para dejar a salvo la independencia del derecho nacional, que las «leyes imperiales» debían observarse, «tan sólo por la buena razón en que están fundadas». Argüían los reformadores que con el tiempo se habían cometido innumerables abusos, recurriendo exclusivamente a las leyes romanas con menosprecio de las leyes patrias, o bien aplicando de un modo indiscriminado las leyes romanas, sin atender a si estaban o no fundadas en aquella «buena razón» que los «Ordenamientos» señalaban como única razón de su vigencia. Procedía, por tanto, restablecer el debido orden de cosas.

De esta manera, bajo la capa de la «buena razón», se introducía ahora en el derecho supletorio portugués el pensamiento iluminista y racionalista de la «Escuela de Derecho natural» y del **usus modernus pandectarum**, tal como figuraba en las obras de sus grandes corifeos, Heineccius, Thomasius, Stryk, etc. Junto al derecho natural y al derecho de gentes, de la escuela de Grocio, la «buena razón» comprendía también las legislaciones extranjeras en materias políticas, económicas y mercantiles.

Subraya el Autor la honda revolución ideológica que supuso para el derecho portugués el nuevo tratamiento dado por la «Lei da Boa Razão» al problema del derecho subsidiario y las consiguientes reformas en la enseñanza universitaria que la complementaron. Pero se dio además el caso de que el curso de la evolución jurídica siguió unos derroteros que el legislador del siglo XVIII no había previsto. El fenómeno de la codificación hizo que el derecho supletorio fuese de hecho cada vez menos el **usus modernus** del derecho romano, tal como pretendía el Marqués de Pombal, para pasar a ser los textos articulados del Código civil francés, del Código de Prusia o del Código austríaco. El derecho romano fue así desplazado por los códigos nacidos a la sombra de unas nuevas corrientes filosófico-jurídicas, muy alejadas, y a veces en las antípodas del **usus modernus pandectarum**. Por este cauce de un nuevo derecho subsidiario, más por la vía jurisprudencial y doctrinaria que por la legislativa, el derecho portugués se amoldó al pensamiento europeo del siglo XIX. Así se cierra el ciclo de la problemática del derecho supletorio en Portugal, del que el Prof. Braga da Cruz nos ha ofrecido una brillante y erudita exposición, que le acredita otra vez como lo que ya sabíamos que era: uno de los grandes maestros de la historia jurídica de nuestro tiempo.

JOSE ORLANDIS

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

RAFFAELE COPPOLA, *Intorno al concetto di anormalità dell'atto amministrativo canonico*, 1 vol. de 51 páginas, Bibliotheca «Monitor Ecclesiasticus», M. D'Auria Edit., Napoli, 1975.

El autor, profesor de la Universidad de Bari, ha publicado ya otros trabajos sobre el tema de la justicia administrativa eclesiástica, que desde 1968 funciona ante el S. T. de la Signatura Apostólica. El contenido del que ahora comentamos es variado: recoge algunas observaciones hechas con ocasión del Congreso canonístico de Sorrento (1973).

Entre los cultivadores del Derecho administrativo —sustancial y procesal— de la Iglesia, no pueden dejar de suscitarse dudas y perplejidades, comprensibles si se tiene en cuenta la provisionalidad y brevedad de la normativa, la corta andadura del sistema y sus perspectivas de ampliación orgánica y procesal, la escasa jurisprudencia producida —y más escasa aún la publicada—, en contraste con el largo camino recorrido por las legislaciones estatales y la doctrina correspondiente. No es de extrañar que el canonista sienta la necesidad de asomarse a esa rica realidad para examinar la problemática que plantea y tomar con prudencia y sobriedad aquellos elementos de juicio valederos para el Derecho de la Iglesia.

Estudia el autor en primer término el concepto de anomalía, más amplio que el de mera invalidez, aunque los demás supuestos tengan poca relevancia para el proceso administrativo. Al tratar luego del «error iuris» (identificado con la ilegitimidad por la Comisión Pontificia de interpretación), dice que en su parecer excluye el «error facti», aunque en este caso cabe la tutela de los tribunales ordinarios. En este punto hacemos nuestra la opinión contraria de Moneta; y por otro lado conviene tener en cuenta que las cuestiones surgidas con ocasión de un acto administrativo vienen sustraídas de la justicia ordinaria, según el c. 1601, la jurisprudencia de la SRR y la nueva legislación.

Propugna además, con Baccari, la admisión del juicio de mérito ante la jurisdicción administrativa, tesis sometida a fuerte contradicción. No olvidemos que es un concepto prevalentemente italiano sobre el cual ni los tratadistas de ese país se ponen de acuerdo. Y aún aceptando la tesis de Virga y otros, de que no es un juicio sobre la oportunidad del acto, como quiera que el tribunal pueda reformarlo o sustituirlo por otro, desempeñaría no una función judicial sino administrativa, para la cual se requiere la potestad correspondiente.

Sin duda, la aceptación de la «aequitas canonica» dentro del juicio de la ilegitimidad ampliará notablemente su esfera, y lo hará más humano y divino a un